

Universidades keniatas: al borde de la insolvencia financiera

ISHMAEL I. MUNENE

Ishmael I. Munene es profesor del Departamento de Liderazgo Educativo en la Universidad del Norte de Arizona, Estados Unidos. Correo electrónico: Ishmael.Munene@nau.edu.

Es un momento crucial para las universidades en Kenia: durante los últimos tres años, el sector ha estado sufriendo una crisis financiera de proporciones, lo que plantea dudas sobre su sustentabilidad a largo plazo. La situación es tan grave que las universidades no pueden cubrir los gastos básicos de funcionamiento, como el pago de sueldos, los servicios públicos y las contribuciones legales, como el impuesto a la renta y los fondos de pensiones. Los supervisores exigieron a una universidad privada que cerrara debido a su insolvencia financiera, mientras que otras dos universidades privadas tienen dos años para pagar todas sus deudas o enfrentar un destino similar. La deuda del sistema universitario público asciende a \$110 millones de dólares y la deuda de la principal universidad pública supera los \$10 millones de dólares.

La crisis actual refleja la catástrofe financiera que hubo a mediados de los años 80 y mediados de los años 90, cuando el sistema universitario público casi sufrió recortes presupuestarios estatales y la introducción de aranceles y otras estrategias basadas en el mercado. Es irónico que un sistema universitario que hace diez años estuvo bien financiado gracias a los aranceles ahora está al borde de la bancarrota. La crisis financiera que prevalece es el resultado de una interacción de dos fuerzas: las reformas políticas a nivel macro con ramificaciones en todo el sistema y la negligencia institucional del gobierno a nivel micro. El primero encapsula el crecimiento del sistema, las disparidades en el aumento de las matrículas, las estrategias de mejora de la calidad, el fracaso del modelo de mercado y la disminución del apoyo estatal, mientras que el segundo incluye los sistemas institucionales débiles de administración financiera.

DESAFÍOS POLÍTICOS EN TODO EL SISTEMA

El crecimiento desordenado del sistema ha reducido los ingresos de los aranceles en la mayoría de las universidades. El aumento inicial se produjo en respuesta a una demanda inédita por la educación superior después de su liberalización a mediados de los años 90. En la década de 1990, había cuatro universidades públicas y una privada. Actualmente, el número de universidades es de 63, de las cuales 33 son públicas y 30 privadas. Alrededor del 70 por ciento de las universidades públicas se establecieron durante el año académico 2012-2013. Sin embargo, la tasa de crecimiento universitario ha superado con creces la tasa de demanda de la educación superior, la cual se estancó en los últimos años. El crecimiento desenfrenado de universidades generó menos ingresos de aranceles en cada institución.

La admisión de estudiantes ha crecido exponencialmente de 10.000 estudiantes en 1990 a 539.749 en la actualidad. De estos, el 86 por ciento están matriculados en universidades públicas, principalmente en las cinco principales. Este patrón de admisión ha dejado a la mayoría de las universidades privadas operando a solo 50-60 por ciento de su capacidad, por lo que se obtienen menos ingresos con los aranceles. Dado que las universidades privadas cobran un arancel más alto, muchos estudiantes eligen estudiar en instituciones públicas. Además, las universidades públicas más nuevas establecidas en áreas marginales no han logrado matricular suficientes estudiantes debido a la ubicación y la falta de reconocimiento de la institución. En consecuencia, mientras el crecimiento del sistema ha absorbido la demanda, también ha causado desigualdades dentro de este entorno educativo que depende de los aranceles.

Las medidas recientes para prevenir el deterioro de la calidad también han llevado a una disminución de estudiantes que pagan sus aranceles. Cuando el estado erradicó las trampas en los exámenes nacionales de la enseñanza secundaria hace dos años, la cantidad de candidatos que calificaron para la admisión a la universidad se redujo en casi un 40 por ciento. Desde entonces, el número de estudiantes calificados es suficiente para que se matriculen en las universidades estatales (el destino preferido para la mayoría de los egresados de escuelas secundarias, debido a los bajos aranceles). También por esta razón, la cifra de estu-

diantes calificados que buscan ingresar a universidades privadas y los ingresos asociados a los aranceles han disminuido en gran medida.

De manera similar, las medidas de mejora de la calidad han llevado a la Comisión para la Educación Universitaria (CEU) a restringir el crecimiento institucional de los campus de baja calidad, en especial los de las universidades públicas. Estos campus, que contratan profesores auxiliares sin títulos y están ubicados en varios centros urbanos de todo el país, han sido un conducto importante para que las universidades aumenten sus matrículas e ingresos a un costo mínimo. La promulgación de estrictos requisitos de autorización para que operen sus campus provocó que muchos de ellos cerraran, privando a las universidades de una importante fuente de ingresos. Una universidad pública cerró 10 de sus 15 campus.

De manera ominosa, el fracaso del modelo de mercado como estrategia para financiar universidades ha lanzado un hechizo oscuro a las políticas neoliberales que eran una alternativa al financiamiento estatal. Ninguna universidad en Kenia ha desarrollado un sistema robusto de generación de ingresos basado en el mercado, además de los aranceles para respaldar la mayor parte de sus operaciones. Los ingresos anticipados de becas de investigación, consultoría, asociaciones industriales y venta de bienes, entre otros, no se han materializado, ya que las universidades carecen de la capacidad para aprovechar estos recursos. Si bien las universidades de los países desarrollados obtienen ingresos de estas fuentes, Kenia, al igual que muchos países africanos, carece de la capacidad económica para apoyar tales desarrollos.

La disminución del financiamiento estatal para las universidades públicas también ha contribuido a la crisis actual. Debido a la presión por el presupuesto estatal, el gobierno ha reducido su apoyo financiero a las universidades públicas. Por ejemplo, en el año fiscal actual, el presupuesto del sistema público universitario se redujo en casi \$300 millones de dólares, ya que el gobierno aplica medidas austeras para evitar una inminente crisis económica. Las universidades públicas recibieron \$1,03 mil millones de dólares en fondos y no su solicitud de \$1,301 mil millones de dólares. Este movimiento intensificará la reducción de personal, las contrataciones y las reducciones en gastos de investigación y viáticos.

ERRORES EN LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL

Según los informes publicados, las universidades keniatas no cuentan con una administración prudente de sus recursos financieros. Una conclusión clave en varios informes de investigación es el robo y la apropiación indebida de fondos. Por ejemplo, una universidad religiosa privada tenía un superávit hace cinco años, pero ahora está al borde de la bancarrota con una deuda de alrededor de \$4 millones de dólares, debido a la sustracción. Otras dos universidades religiosas han tenido paros estudiantiles y cambios disruptivos de administración por irregularidades en la gestión de sus recursos financieros. Las universidades públicas también han cometido irregularidades financieras. Han sido citadas por el auditor general del gobierno por malversación de recursos y malas inversiones. Por ejemplo, contrataron personal fijo por un aumento proyectado en la admisión de estudiantes que costean sus estudios, lo que resultó ser poco realista. Una universidad pública inauguró dos campus fuera del país a un costo de casi \$7 millones de dólares, pero debido a infracciones legislativas, estas escuelas fueron clausuradas por las autoridades antes de que pudieran operar por completo y lograr un equilibrio económico.

El crecimiento desordenado del sistema ha reducido los ingresos de los aranceles en la mayoría de las universidades.

EL FUTURO

Para aliviar el estrés financiero que actualmente enfrenta el sector universitario de Kenia, se requiere una inyección inmediata de dinero, pero para una solución a largo plazo, se necesita un replanteamiento creativo de múltiples estrategias económicas para financiar la educación superior. Esto implica un apoyo estatal bien pensado y estructurado para las universidades públicas y privadas, transparencia en la toma de decisiones financieras a nivel institucional, separación de la administración de las universidades privadas, vinculación de decisiones presupuestarias con matrículas re-

alistas y más contratación de gerentes financieros que de académicos, como es el caso hoy en día, para dirigir las decisiones financieras.

DOI: <http://dx.doi.org/10.6017/ihe.2019.97.10789>

La equidad en los sistemas de educación superior: observaciones de Argentina y Chile

ANA GARCÍA DE FANELLI

Ana García de Fanelli es investigadora senior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES) en Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: anafan@cedes.org.

Los debates públicos sobre la equidad en la educación superior por lo general se centran en el impacto de las políticas de admisión y financiamiento en un sistema en conjunto. En primer lugar, se supone que cuanto más selectivos sean los criterios y los procedimientos de admisión, menos oportunidades tendrán los estudiantes de bajos ingresos para acceder a la educación superior. En segundo lugar, se supone que la distribución de costos de los estudios de pregrado a través de los aranceles puede reducir la posibilidad de que los estratos sociales menos privilegiados busquen acceder a la educación superior. Aunque ambas premisas son ciertas, otros dos factores pueden afectar significativamente la equidad en la educación superior: la capacidad de la escuela secundaria y los niveles de pregrado para mantener y entregar educación de alta calidad a los estudiantes de bajos ingresos y con desventajas culturales; y la diferenciación institucional, la que resulta en una estratificación vertical en términos de estatus, con estudiantes de bajos ingresos que asisten a instituciones de menor calidad.

ACCESO Y FINANCIAMIENTO EN ARGENTINA Y CHILE

Podemos ilustrar las complejidades de la interacción entre políticas y resultados de equidad con dos casos de América Latina, que exponen políticas polarizadas de acceso y financiamiento. Argentina tiene una política de ingreso no selectivo para la mayoría de los programas de pregrado (por ejemplo, sin examen de ingreso o con un número máximo de vacantes) y estos mismos programas son gratuitos en el sector público, el cual tiene el mayor porcentaje de matrículas (75% del total de matrículas en 2015). Por el contrario, el sistema chileno se basa en políticas de admisión selectiva y altos aranceles en el contexto de una estructura de mercado de educación superior considerablemente privatizada (en 2017, 84% de las matrículas eran del sector privado). En principio, deberíamos esperar mejores resultados de equidad en Argentina que en Chile.

Sin embargo, la evolución de las tasas de participación del quintil de ingreso más bajo en estos dos países no refleja esta hipótesis. Chile ha mejorado rápidamente el acceso a la educación superior para los estudiantes que pertenecen a los estratos más bajos, superando la tasa neta de matrícula (TNM) de Argentina. Según los datos basados en las Encuestas nacionales de hogares recopiladas en la Base de Datos Socioeconómica para América Latina y el Caribe (SEDLAC) en 2015, la TNM del quintil de ingreso más bajo fue de 29% en Chile y 19% en Argentina. Diez años antes, estas mismas tasas fueron de 13% y 16%, respectivamente. En 2015, la proporción entre la participación del quintil superior y la del quintil inferior en la educación superior fue de 2,2 en Chile y 2,8 en Argentina.

Estos indicadores de participación no implican necesariamente que la educación superior chilena sea más equitativa en todos los aspectos que la de Argentina, pero llaman la atención dada la complejidad del desafío de la equidad en el contexto de la masificación y la diferenciación de la educación superior. Además, ambos sistemas muestran grandes desigualdades. Para comprender mejor los factores que afectan a la igualdad, debemos examinar los dos temas mencionados anteriormente: las posibilidades que tienen los estudiantes de bajos ingresos de terminar la escuela secundaria y persistir en sus estudios universitarios, y los tipos de instituciones a las que pueden asistir.